

El "aquí está la última palabra" con que Fernández Ordóñez terminó su alocución inicial fue, por lo menos, una equivocada premonición. Porque ni el debate que la Comisión de Hacienda mantuvo sobre las medidas fiscales de urgencia era la última palabra sobre la crisis económica, ni en lo que al tema de la reforma fiscal concierne se llegó a sancionar la "primera palabra". El primer debate sobre la actuación del Gobierno que mantenían las Cortes democráticas no terminó en tablas ni hubo vencedor: sencillamente, no terminó. Tal vez ni siquiera empezó.

Fue, a pesar de sus graves limitaciones, un espectáculo reconfortante: aquello sonaba a democracia, aunque evidentemente con procedimientos tan recortados que así no se consolida la democracia. Fernández Ordóñez quería únicamente exponer su minirreforma fiscal. Los parlamentarios, del PSOE, del PCE, del PSP, del grupo catalán y hasta tímidamente López Rodó querían debatir toda la política económica.

"Se va a examinar una pieza sin conocer cómo va a funcionar el conjunto del mecanismo. No es buena técnica legislativa el trabajar por adivinación", denunciaba Enrique Barón, del PSOE, al principio de su alocución. Y para unos parlamentarios, a los que el Gobierno ha dejado absolutamente al margen a la hora de sus decisiones de política económica, a la hora de devaluar, de subir los precios, la minirreforma fiscal sabía a poco.

Las cinco notas con que Fernández Ordóñez tipificó su proyecto no dejaban lugar a dudas sobre las escasas intenciones del minis-

tro de entrar en un debate a fondo sobre la crisis: ese no era el tema de esa tarde y las limitaciones reglamentarias —cinco minutos por orador— así lo confirmaban. Luego, a la hora de contestar a las interpelaciones de los parlamentarios, utilizó distintos pesos y medidas cuando todos, casi sin excepción, habían planteado cuestiones al margen de las medidas fiscales: el único que fue acusado formalmente de haberse salido del tema fue Tamames, del PCE.

El ministro, en el folio dos de su discurso, adelantó que la reforma que se presentaba "no es una simple pieza de un proceso de negociación política o de un compromiso salarial". Un no porque no, sin más explicaciones, técnica que volvería a utilizar para defen-

fuerzo que se exige a los ricos con esta reforma fiscal no es comparable con el que se pide a los trabajadores mediante una reducción de sus salarios. Tamames cuantificó esta desigualdad: las medidas fiscales equivalen a una contribución de los pudientes por valor de 22.000 millones de pesetas. Una contribución de ese 20 por 100 de la población que, en palabras de Fernández Ordóñez, poseen el 50 por 100 de la renta nacional. Y frente a esos 22.000 millones que es el sacrificio de los ricos, los pobres, los trabajadores, habrán de contribuir con 250.000 millones, que es la cifra que se deduce de la propuesta de aumento salarial lineal de 50.000 pesetas que ha hecho el Gobierno: si la inflación sube sólo un 23 por ciento, como asegura Fuentes, y

can esta actitud. El primero es que si se aceptan las medidas como contrapartida del control salarial, la desproporción es tan evidente que las haría aparecer ridículas en este propósito. Y el segundo es que una cierta oligarquía —como, por ejemplo, un Gabriel de Usca, que en "Empresa 2000" rechaza abiertamente las medidas fiscales del Gobierno— no aceptaría este juego del toma y daca: los obreros, para ellos, tienen que apretarse el cinturón sin más contrapartidas. Para eso se les ha dado trabajo y para eso se les han aumentado los salarios.

Lo malo es que la no aceptación de esta filosofía por parte de Fernández Ordóñez condicionó totalmente el debate. Porque ni para la derecha, ni para la izquierda, ni para el centro la minirreforma fiscal tiene sentido si no es en este contexto. La calificación de "leva de impuestos" que hizo Fernández de la Mora, de AP, es irrelevante a este respecto. Porque hacer una minirreforma fiscal que sólo va a proporcionar 22.000 millones al Tesoro —algo menos del 3 por 100 de sus ingresos totales—, si no es para convencer a la izquierda de la oportunidad de apretarse el cinturón y ello a cambio de enfadar seriamente a la derecha, es una operación sin sentido y poco rentable.

Los empresarios, tampoco

Trías Fargas puso un sustancial contrapunto en este difícil esfuerzo por ir a la verdad de la cuestión. Trías, siguiendo a Tamames, quien había señalado que las centrales no parecían dispuestas a entrar en el juego, vino a decir que

REFORMA FISCAL: La crisis requiere un debate más profundo

CARLOS ELORDI

derse de las acusaciones de que la política económica del Gobierno beneficiaba únicamente a la oligarquía. Y en ese no porque no estaba el quid de la cuestión.

Do ut des

Los socialistas Barón y Ernest Luch plantearon el tema: el es-

esas 50.000 pesetas constituyen un aumento del 16 por 100, los trabajadores perderán un 6 por ciento. Esa es la cuestión.

Esa es la cuestión que por todos los medios quiso eludir Fernández Ordóñez. Para él, la minirreforma fiscal no es una pieza de negociación: dos motivos expli-



Fernández Ordóñez: brillante, pero limitativo.

LA CRISIS

a menos que se restableciera una confianza perdida, que era la única causa del descenso de la inversión, los empresarios tampoco entrarían en el juego. Fernández Ordóñez contestó al catedrático catalán que había que convencer a los empresarios que la salida no es fácil: "Lo demás sería alentar falsas esperanzas". Un mensaje demasiado hueco y patético como para levantar los decalados ánimos de una cierta patronal, de esa patronal de la que podía estar ha-

blando Trías y que empieza en los alrededores de la oligarquía y termina en la pequeña empresa. El profesor catalán había tocado uno de los extremos del debate realmente necesario.

Los socialistas hicieron varias propuestas concretas que gustaron al ministro, que prometió trabajar por realizarlas: un proyecto de Ley para obligar a todos los parlamentarios y cargos políticos de la Administración a hacer declaración de bienes; la publicación de las listas de Hacienda y la posibilidad de reproducirlas, propuesta que corrió a cargo de Baldomero Lozano, el tercero de los cuatro parlamentarios socialistas que intervinieron; la aplicación del Código

Penal a las retenciones indebidas de actas de IRTP o de rentas de capital, también a cargo de Lozano.

El desprecio de Fernández de la Mora

AP, sobre todo en la intervención de Fernández de la Mora, sobrevoló por encima del debate, como si con ellos no fuera la cosa. El diputado por Pontevedra, el hombre del fin de las ideologías, pontificó sin rubor y con un cinismo que hasta a Fernández Ordóñez pareció excesivo sobre los temas económicos. A él no parecía

importarle pedir una política reactivadora para a continuación exigir la austeridad; a lo mejor no quería convencer a nadie, sino mostrar su desprecio por lo que delante de él tenía. Pero hasta tuvo suerte, porque Barón no interpretó, al pie de la letra, su referencia al franquismo y Fernández de la Mora pudo hacer una lúcida réplica.

Los comunistas, único grupo parlamentario que intervino por boca de un orador que representaba a los demás integrantes del partido en la comisión, estuvieron mucho más duros que en ocasiones anteriores. Denunciaron la política económica del Gobierno, la definición como un plan destinado a beneficiar a la oligarquía, incluido el impuesto extraordinario —Tamames subrayó el calificativo, tal vez augurando una posible desaparición en el futuro— sobre el patrimonio, del que van a ser víctimas principales los pequeños y medianos empresarios, cuyo patrimonio personal se confunde con el de la empresa. Y los comunistas también rompieron la baraja: "No todo puede resolverse con la llamada economía social del mercado. Si la libre economía llevó a la actual situación de capital monopolista, el pretender basar el nuevo modelo de desarrollo únicamente en el libre funcionamiento del mercado reforzará aún más ese capitalismo monopolista".

El optimismo, ¿de qué voluntad?

Rechazado por las centrales sindicales, presentando un plan de medidas fiscales que no entusiasma a la izquierda —Tamames sugirió que la reforma fiscal podía haber empezado eliminando las exenciones que por valor de más de 100.000 millones de pesetas benefician exclusivamente a la oligarquía—, con una derecha reticente, preocupada por el aumento de la presión fiscal y desconfiada ante la capacidad del Gobierno para llegar a un acuerdo con la izquierda, Fernández Ordóñez citó a Gramsci: "Frente al pesimismo de la inteligencia, el optimismo de la voluntad".

Pero con citas no se va a resolver la gravísima cuestión económica para la cual, repetimos, hoy no se ve la salida. La fórmula comunista de gobierno democrático (la pregunta final de Tamames fue cómo entendía el ministro que un Gobierno minoritario iba a superar la crisis sin contar con el indispensable consenso de las fuerzas sociales mayoritarias del país) es únicamente compartida por el PCE: otra cosa sería si el PSOE estuviera dispuesto a jugar la carta.

Sin acuerdo de base, sin fórmula política para sustentarlo, con una derecha económica, la franquista, decidida a no perder su enorme parte del pastel, ¿qué pueden hacer las Cortes en torno a la política económica? Poco, y menos si a su jurisdicción únicamente pasan aspectos marginales de la actividad del Gobierno. Las Cortes no pueden tener esa última palabra en todo y la validez de la discusión con las centrales es innegable, pero sí mucho más de lo que hasta ahora se les ha dado. La discusión sobre las medidas fiscales supo a poco y se noto. ■ C. E.



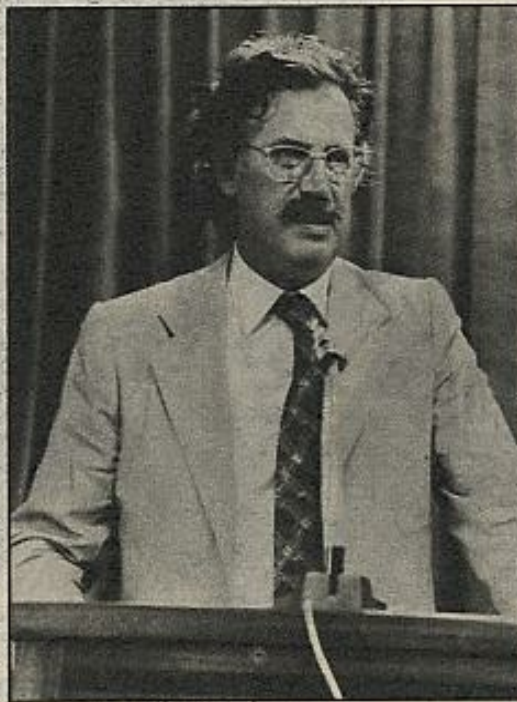
Enrique Barón (PSOE): iniciativas aceptables.



Ramón Tamames (PCE): una lógica distinta.



Fernández de la Mora (AP): un cierto desprecio.



Trías Fargas: los empresarios tampoco juegan.